



José C. Ugaz S.M.

La crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, como toda gran crisis, es multicausal. Hace veinte años, inició un proceso de debilitamiento institucional y degradación social que ha culminado en la tragedia que asola a ese país y sus ciudadanos en la actualidad.

Pese a la riqueza derivada del petróleo y aun cuando por muchos años el régimen gozó de la simpatía de la mayoría de la población, al populismo se fue sumando una perniciosa variable que hoy aparece como una de las causas fundamentales de su desgracia: la corrupción.

mo se fue sumando una perniciosa variable que hoy aparece como una de las causas fundamentales de su desgracia: la corrupción.

Sin embargo, no ha sido cualquier corrupción la que ha asolado a Venezuela. Como en el promedio de los países latinoamericanos, históricamente la corrupción en Venezuela ha sido un factor nocivo caracterizado por ser un fenómeno sistémico, extendido y “normalizado”.

La corrupción es sistémica cuando las estructuras permiten que las acciones corruptas aparezcan como normales y conformes con el sistema social (o por lo menos con partes muy influyentes de él). Este tipo de corrupción se encuentra enquistada en las estructuras propias del Estado. No constituye un fenómeno episódico o coyuntural, no depende de la llegada al poder de un partido político en particular o de un líder negativo o un conjunto de autoridades venales. Tiene que ver con la forma como ha sido organizado el Estado desde sus orígenes.

Como ha ocurrido en la mayoría de los países de la región, a partir de la conquista española se implementó un modelo de Estado que se asentó sobre una matriz clientelista destinada a favorecer a determinados grupos vinculados al poder, basada en el intercambio de favores.

La diferencia histórica entre países pobres y aquellos que han logrado significativos niveles de desarrollo está centrada en lo que algunos autores denominan instituciones económicas extractivas, versus instituciones económicas inclusivas. Estas últimas, a diferencia de las extractivas, promueven el desarrollo del bien común buscando, no solo beneficiar a las élites, sino a la población en general. En el caso de las instituciones económicas extractivas, la mezcla de una búsqueda de beneficios para un grupo en el contexto de sistemas políticos autoritarios resulta muy propicia para la generación de prácticas corruptas.

La mayor o menor incidencia de la corrupción en un país, tiene que ver con la existencia o inexistencia de instituciones fuertes, libertades como la de expresión y opinión y el acceso a la información pública. A ello se debe que países con debilidad institucional, regímenes autoritarios o precario Estado de derecho y escasa vigencia de derechos fundamentales, padezcan de muy altos niveles de corrupción.

Salvo contadas excepciones, esta ha sido la característica de la región latinoamericana, democracias débiles y precarias marcadas por golpes de Estado y regímenes militares, escasa institucionalidad, mucha opacidad en los procesos de toma de decisiones, exclusión de vastos sectores de la población, etc.

Por todo ello, nadie puede decir que la corrupción en Venezuela es un problema nuevo. Ha estado presente desde siempre. Lo nuevo, sin embargo, es la dimensión que ha cobrado durante el período autoritario iniciado por Chávez y continuado por Maduro y las gravísimas consecuencias que ello importa para el pueblo de Venezuela.

En Venezuela se ha pasado de un problema de corrupción administrativa extendida y de una captura del Estado entendida en sentido clásico (grupos de poder económico influyendo en las decisiones del Estado para su propio beneficio) a lo que hoy se conoce como gran corrupción.

En términos de Naciones Unidas, la gran corrupción es una expresión usada para describir aquella que penetra los niveles más altos de gobierno, generando graves abusos de poder y distorsionando las funciones centrales de gobierno.

Por su parte, Transparencia Internacional la define como el abuso de poder de alto nivel que beneficia a pocos al costo de muchos y causa un daño extendido y serio a individuos y a la sociedad en su conjunto, permaneciendo usualmente impune.

Una característica de la gran corrupción es el denominado factor social, pues el perjuicio causado no es solo económico, sino que afecta también a los derechos fundamentales y libertades políticas del conjunto de los ciudadanos. La diferencia cualitativa de esta corrupción con la tradicional es que es generadora de graves violaciones a los derechos humanos, más aún cuando se da la mano con el crimen organizado.

Lo que se inició como una “Revolución Bolivariana” emprendida por el fallecido ex-presidente Hugo Chávez y continuada por su sucesor Nicolás Maduro, con el declarado objetivo de construir una patria libre para el beneficio de todos, ha terminado siendo una cleptocracia cruel, organizada para saquear el Estado venezolano en beneficio exclusivo de quienes se encuentran en la cúspide del régimen, habiéndose enriquecido a niveles inverosímiles, mientras millones de venezolanos padecen hambre y privación de sus derechos básicos de subsistencia, viéndose condenados a la desnutrición, la enfermedad, y en muchos casos, la muerte, o en su defecto, obligados a migrar en condiciones absolutamente precarias.

En materia de seguridad ciudadana, Venezuela se ha convertido en el país con los más altos niveles de violencia en el mundo. A un año del gobierno de Chávez, en el 2003, los homicidios pasaron de 4.000 a 8.000. Hoy, 15 años después, en Venezuela se cometen 28.000 homicidios al año, lo que equivale a 91,8 homicidios por 100.000 habitantes, una cifra sin parangón en el mundo.

Este acelerado deterioro de la seguridad interna obedece a que, al poco tiempo de llegar al poder, el régimen distorsionó el sistema de seguridad pública. Luego, en una lógica perversa, se instrumentalizó a la delincuencia organizada para reforzar algunas de las prácticas del régimen y orquestar respuestas violentas a la disidencia.

El desmontaje institucional ha llegado a tal extremo que hoy asesinan a dos policías al día en Caracas. La policía es escasa (200% de déficit), mal pagada, y carece de incentivos (un comisario con 20 años de experiencia gana un sueldo simbólico de US\$ 15 al mes). Desde 2015 se realizan las llamadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP), redadas sin control en materia de protección de derechos humanos que han causado más de 550 muertos a la fecha.

El régimen ha creado el siniestro y todopoderoso Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). En sus mazmorras (El Helicoide y La Tumba), hay más de 300 presos políticos detenidos por años, sin cargo alguno, sin juicio, sometidos a torturas y sin ningún tipo de control. Jueces y fiscales totalmente subordinados no tramitan habeas corpus ni están autorizados a ingresar.

En materia económica, Venezuela importa el 90% de lo que necesita (compra entre US\$ 35.000 y US\$ 45.000 millones al año en alimentos). Tiene una deuda impagable con China (US\$ 44.000 millones) y Rusia (US\$ 20.000 millones), habiendo pasado la deuda total de US\$ 30.000 millones a US\$ 300.000 millones. La inflación llega a 2.000.000%.

El Gobierno ha creado un sistema de cambio de divisas que genera grandes distorsiones y ha posibilitado fortunas corruptas con el abuso del tipo de cambio preferencial (10 vs. 24.000 bolívares por dólar).

Se ha destruido el aparato productivo del país. En 1978, Venezuela producía el 75% de sus alimentos; hoy solo el 5%. Se ha entregado la distribución de alimentos a los militares, lo que ha creado un inmenso mercado corrupto de especulación a través de los llamados “bachaqueros” y la reventa de alimentos robados a los Comités

Locales de Abastecimiento Popular (CLAP), un sistema de distribución de la canasta básica que, además, se ha convertido en una fuente inagotable de estructuras corruptas para favorecer a autoridades del gobierno y empresarios aliados captando millones de dólares producto de los sobrepresos de los alimentos.

La escasez de alimentos y medicinas ha creado una crisis humanitaria en el país. El 82% de la población vive en pobreza extrema (el 94% de los venezolanos no tiene ingresos suficientes para pagar la canasta básica), y el 61% solo come 2 veces al día, con una pérdida de peso promedio per cápita de 11 kg. desde que se inició la crisis. Hay 4 millones de venezolanos desnutridos. El 33% de los niños de sectores populares padece retardo de crecimiento. Aproximadamente 1,500.000 niños entre 0 y 2 años se encuentran con desnutrición crónica. Más de 400.000 niños deben ser atendidos de manera inmediata para evitar daño irreversible y miles mueren por falta de atención médica adecuada.

En los últimos años han emigrado más de 4 millones de personas sobre una población de 31 millones y 700.000 niños han desertado de la escuela.

De otro lado, la otrora gigante y poderosa petrolera estatal PDVSA, se ha convertido en el botín del régimen. La empresa está devastada, Chávez despidió a más de 20.000 trabajadores para luego triplificar la plantilla con gente afín al régimen. A la fecha, pese a la dramática caída de la producción producto de la ineficiencia, el 100% de las divisas que recibe Venezuela entran por la venta de petróleo, habiéndose perdido US\$ 31.000 millones por contrabando de gasolina en la última década.

Se ha producido una cooptación total de las instituciones por parte del régimen, entre ellas, el Tribunal Supremo, la Contraloría General, la Fiscalía General, el Banco Central de Venezuela, entre otros.

Entre los múltiples escándalos de corrupción, están el del caso Money Flight en el que se detectó un desfalco de US\$ 1.200 millones, el caso de la constructora Conkor que involucra a Tarek William Saab

(Fiscal General designado por la Asamblea Constituyente), y el de Odebrecht, empresa brasileña a la que se le ha pagado más de US\$ 20.000 millones, pese a lo cual no existe investigación alguna en su contra. Se calcula que entre el 2002 y 2015, se han desviado US\$ 120.000 millones en corrupción (solo 5 casos de corrupción en el extranjero suman US\$ 15.000 millones).

A la corrupción propiamente dicha, debe agregarse el problema del narcotráfico internacional y su alianza con el régimen. Según se refleja en medios y redes, el territorio venezolano está siendo utilizado por los cárteles de la droga como centro de operaciones con el beneplácito y enriquecimiento con fondos ilegales del gobierno y sus principales líderes, varios de los cuales han sido ingresados a las listas de narcotraficantes más buscados por los Estados Unidos.

Lo grave es que no se trata de una revolución fallida ni de un régimen incompetente. Hay una red criminal cívico-militar en el poder que deliberadamente ha desmontado la infraestructura productiva del país y ha creado mecanismos corruptos de control de alimentos, gasolina y divisas, para generar un mercado negro en el que se han enriquecido fabulosamente a costa de la vida y salud de la población. La utopía socialista ha sido enterrada bajo toneladas de corrupción.

Semejante panorama no hace más que confirmar que la gran corrupción implica en casos como el de Venezuela, una captura -- literalmente hablando -- del Estado, para ponerlo al servicio de los intereses de una clase enquistada en el poder.

Pocos casos como el de Venezuela muestran al mundo las devastadoras consecuencias que tiene la gran corrupción en los derechos humanos de la gran mayoría de la población, la que no sólo se ve privada de sus derechos civiles y políticos, como suele ocurrir en los regímenes totalitarios, sino incluso de aquellos derechos básicos íntimamente vinculados a la dignidad humana, como la vida, la salud y la educación.

La dimensión de la crisis generada por la gran corrupción en Venezuela ha desbordado las fronteras del país. Actualmente, todos los

países de América Latina están impactados por la masiva migración de millones de ciudadanos venezolanos empujados a salir de su país en situaciones inimaginables, quienes llegan a territorios desconocidos desesperados por conseguir trabajo para satisfacer las necesidades básicas que no pueden resolver en su país.

Esta situación no sólo ha creado crisis sociales en la mayoría de los países receptores, sino que ha generado una reacción xenofóbica en muchos de ellos, situación que re – victimiza a los migrantes.

En el ámbito político, la situación de Venezuela – y recientemente la de Nicaragua – han contribuido a profundizar el cisma generado en los tiempos del “ALBA”, alianza promovida por Chávez para aglutinar a los países supuestamente progresistas. Hoy Venezuela se ha ido quedando sola, apoyada solamente por Bolivia, Nicaragua y algún país caribeño beneficiado con su petróleo, mientras que se ha creado el denominado “Grupo de Lima”, conjunto de países que busca poner fin a la crisis de Venezuela con la partida del régimen de Maduro a través de vías democráticas.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por su secretario general, ha venido denunciando al régimen opresor de Maduro y promoviendo sanciones que precipiten su salida del poder. A raíz de la nominación de Juan Guaidó como nuevo mandatario de Venezuela, la OEA, así como la mayoría de países de la región, han reconocido la legitimidad de su mandato, incrementando el aislamiento de Maduro, quien sin embargo, se sostiene apoyado por Rusia, China e Irán.

La intervención de estas potencias, particularmente la de Rusia, ha planteado una nueva tensión en el contexto americano, al oponerse, haciendo referencia a posibles represalias, a la presión que por su parte está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos sobre el debilitado régimen de Maduro.

Esta situación, revela cómo la gran corrupción que padece Venezuela, incluso impacta significativamente en las relaciones internacionales, al punto que ha generado un nuevo mapa político con importantes cambios en las dinámicas de relación de los países de la región.

Es de esperar, por el bien de Venezuela y los venezolanos, pero también por América Latina, que el oprobioso gobierno de Maduro llegue a su fin pronto, sin precipitar salidas violentas, dando paso a la reconstrucción del país a través de un régimen de transición ordenado y eficiente.